

Gran incendio forestal en el Baix Ebre

El contexto

Campos de olivo abandonados por un sector agrario que languidece

Los afectados que ayer pudieron entrar a sus fincas hacían una primera valoración de los daños



El estado en el que quedó uno de los campos de olivos. FOTO: JOAN REVILLAS

NÚRIA RIU
TARRAGONA

Según el sindicato Unió de Pagesos el 70% de la superficie afectada por el fuego del Baix Ebre son antiguas fincas agrícolas que, en los últimos sesenta años, han sido abandonadas y que, con el paso de los años, han quedado invadidas por masa forestal que facilitó la propagación de las llamas. «Principalmente eran campos de olivos en terrenos deprimidos y poco productivos que dejaron de cultivarse porque era una superficie poco rentable», argumenta el coordinador comarcal del Baix Ebre del sindicato Unió de Pagesos, Carlos Sanz.

La agricultura ha ido en retroceso también en las comarcas del sur de Catalunya. En los años setenta, entre el 10 y el 15% de la población activa de la zona se ganaba la vida con el cultivo del olivo y de la fruta. Hoy, este colectivo tan solo representa el 2%, y la tendencia es que esta cifra siga a la baja.

El apunte Ejecutar las franjas contra incendios

La Fundació Pau Costa, dedicada a la prevención y gestión de incendios forestales, insta a garantizar la implementación de las franjas de protección contra incendios, pero advierte de que podrían no ser una herramienta eficaz en futuros incendios. «Aunque la herramienta con la que contamos actualmente no es la mejor, debemos garantizar que las que ya la tienen se implementen», declaró el director

El sector está envejeciendo y la falta de relevo generacional hace que tan solo el 8% de los payeses tengan menos de cuarenta años. Se suma la falta de rentabilidad de un sector que hace tiempo que mantiene un pulso con la administración para garantizar una política de precios que permita la continuidad de una actividad vital pa-

de la organización, Jordi Vendrell, en una comparecencia ante la Comisión de Interior del Parlament. La organización argumenta que es necesario evaluar la eficacia de las franjas de protección y adaptarlas al contexto actual. También reclamó la necesidad de una estrategia catalana de riesgo de incendios integrada para unificar criterios y mejorar la coordinación institucional.

Sobre las franjas de protección, Núria Prat, responsable del área de conocimiento de la

fundación, advirtió de que lo que ocurrió en Los Ángeles o lo que ahora está ocurriendo en Marsella, con el fuego llegando a las urbanizaciones, podría ocurrir, por ejemplo, en Barcelona. «No podemos esperar cinco años más», advirtió.

Entre las demandas que la entidad plantea se encuentra que las infraestructuras de prevención y protección contra incendios sean consideradas «elementos de utilidad pública» para poder realizar «ejecuciones forzadas».

mundo en el que nunca sabes qué cobrarás a final de mes?», dice Sanz.

Las fincas en zonas abruptas se han dejado perder, mientras que los que han podido continuar ha sido porque han virado hacia una producción intensiva que obliga a estar pendientes del cielo para prever las inclemencias del tiempo.

La payesía languidece y solo cuando ocurren grandes incendios como el que hemos visto esta semana vuelve a escucharse un sector que se desangra. Los síntomas son sobradamente conocidos. Y, pese a que desde la administración estos días solo se escuchan compromisos y buenas palabras, el representante de Unió de Pagesos asegura que «los únicos que continúan es porque es vocacional o porque tienen a alguien que les respalda».

Sobrepasados por el papeleo

Sanz ha vivido con sus propias creces de lo que habla. Estos últimos años ha visto cómo su hijo, de menos de veinte años, quería continuar en el campo a pesar de que el contexto de sequía ha supuesto un quebradero de cabeza adicional para iniciar una explotación. «Con las ayudas mínimas, si no hubiera sido por la moratoria en los créditos, no habría podido hacerlo», indica.

La burocracia tampoco ha ayudado, ya que cuando tuvo que

Payeses y propietarios de bosques sitúan la burocracia como uno de los problemas

pasar los derechos de la PAC detectaron que la persona transmisora tenía una deuda de 20 euros con Hisenda por no haber abonado el impuesto de hidrocarburos. Esto hizo que tuviera que tramitar un recurso y que «durante tres años no recibiera contestación alguna», lo que acabó provocando que perdiera entre 20.000 y 25.000 euros procedentes de las ayudas comunitarias europeas.

«Las cosas podrían cambiar, pero para ello es necesario que tengamos gobiernos valientes que hagan fuerza en Europa y que consigan un cambio en las políticas agrarias de acuerdo con las necesidades del Mediterráneo», argumenta Sanz.

Los agricultores reivindican un nuevo modelo de acuerdo con las políticas y necesidades de los países del sur, que permita continuar